

MEMORANDO

(563)

Bogotá, D.C.

PARA: PAULA LORENA CASTAÑEDA VASQUEZ
Directora de la Dirección Jurídica de la S.D.G.

DE: JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA.
Alcalde Local de Tunjuelito (E).

REFERENCIA: Respuesta a radicado Sistema Orfeo No. 20255610006632.

ASUNTO: Contestación acción de tutela No. 2025 - 00037

Respetada Doctora:

He recibido la comunicación del asunto y al respecto este despacho se pronuncia en los siguientes términos:

Señora Juez:

MARIA DEL PILAR RIVERA VIEDA

JUZGADO 123 PENAL MUNICIPAL FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO

j123pmcibt@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOGOTÁ D.C.

REF: Acción de Tutela No. 2025 - 00037

DE: CARLOS JAVIER ROMERO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.986.184 de Bogotá.

CONTRA: Alcaldía Local De Tunjuelito y la Inspección 6A Distrital De Policía De Bogotá D.C.

VÍNCULADOS: Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C., Defensoría del Pueblo.,

Personería de Bogotá., Procuraduría General de la Nación.,

ASUNTO: Contestación de Tutela

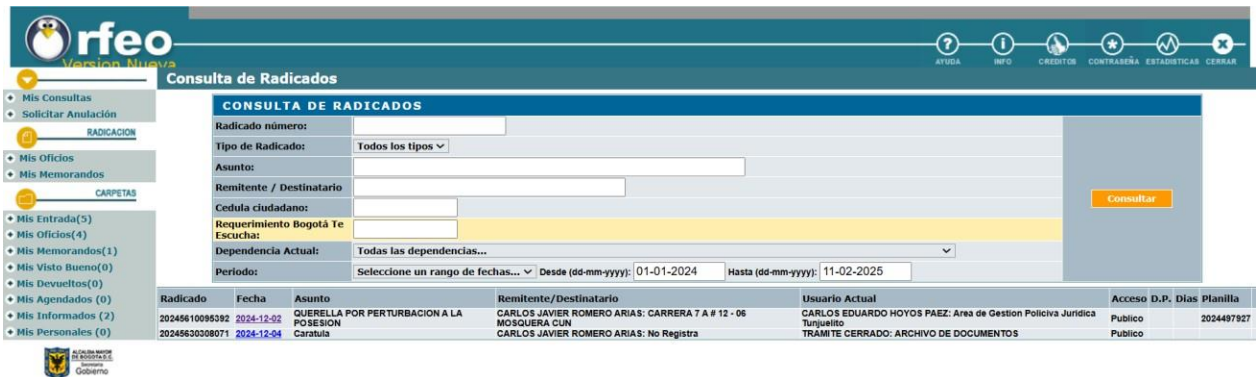
En mi calidad de Alcalde Local de Tunjuelito, acudo con todo respeto a su despacho para dar contestación, dentro del término legal, a la acción de tutela de la referencia, en los siguientes términos:

HECHOS:

Frente al hecho No. 1: La Alcaldía Local de Tunjuelito no se pronuncia porque no le consta lo dicho por la accionante y en consecuencia, se atiende a las resultados de lo probado dentro de la presente acción.

Frente al hecho No. 2: Es cierto, teniendo en cuenta que, una vez verificado el Sistema de Gestión Documental (ORFEO), el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá te escucha) y el Centro de Documentación e Información - CDI de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se evidencia que, el señor Carlos Javier Romero Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.986.184 de Bogotá, interpuso querella “por perturbación a la posesión” en contra de la ciudadana Luz Marina Palencia Caicedo, quedando registrada con radicado Orfeo No. 20245610095392 de fecha 02 de diciembre de 2024.

Frente al hecho No. 3: “Efectuados varios requerimientos a la Alcaldía con el fin de que se diera el trámite respectivo a la querella interpuesta, se me informaba que estaba en trámite”, NO es cierto, teniendo en cuenta que una vez efectuada la consulta en el Sistema de Gestión Documental (ORFEO), el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas (Bogotá te escucha) y el Centro de Documentación e Información – CDI, se evidencia que el accionante radica únicamente la querella bajo radicado Orfeo No. 20245610095392 de fecha 02 de diciembre de 2024. (se anexa pantallazo de la búsqueda)



Radicado	Fecha	Asunto	Remitente/Destinatario	Usuario Actual	Acceso D.P.	Días Planilla
20245610095392	2024-12-02	QUERRELLA POR PERTURBACION A LA POSESION	CARRERA 7 A # 12 - 06	CARLOS EDUARDO HOYOS PAEZ: Area de Gestion Policia Juridica	Publico	2024497927
20245630208071	2024-12-04	POSESION	MOSQUERA CUN	Tunjuelito	Publico	
		Caratula	CARLOS JAVIER ROMERO ARIAS: No Registra	TRAMITE CERRADO: ARCHIVO DE DOCUMENTOS	Publico	

Frente al hecho No. 4: Es cierto.

Frente al hecho No. 5: Es cierto, teniendo en cuenta que, desde el mes de noviembre de 2024, la Inspección 6A no contaba con titular para ese despacho. No obstante, el día 28 de enero de 2025, a través de la resolución No. 0077 fue asignado el Inspector de Policía 6A para la Localidad Sexta de Tunjuelito, el cual tomó posesión del cargo el día 07 de febrero de 2025. (se anexa copia de la mencionada resolución).

Aclarando de igual forma que el sistema “ARCO”, implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno para el registro y trámite de comparendos, quejas y querellas de competencia de los inspectores de policía distrital, **NO PERMITE QUE EL PROFESIONAL 222-24 UNA VEZ HAYA REALIZADO EL REPARTO Y ASIGNACIÓN DE UNA ACTUACIÓN POLICIVA, PUEDA VOLVER A REASIGNARLA COMO LO EXIGIE EL SEÑOR ACCIONANTE.**

Frente al hecho No. 6: No es cierto, teniendo en cuenta que el numeral 13 del Artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, establece que corresponde al Alcalde Mayor tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código.

En concordancia con el artículo 7 del acuerdo 735 de 2019, “*Inspecciones y Corregidurías Distritales de Policía*”. El Alcalde Mayor de Bogotá determinará el número de Inspecciones de Policía que considere necesario para una oportuna, rápida y cumplida prestación de la función de Policía en el Distrito Capital.

En consecuencia, los alcaldes locales no cuentan con la facultad para nombrar o designar a los inspectores de policía en las localidades del Distrito Capital, en consecuencia, no es cierto lo dicho en este punto por el accionante referente a: *Con tal omisión de la administración local de Tunjuelito de Bogotá D.C., se ve reflejado que se me están vulnerando mis derechos fundamentales como pasa a verse enseguida, violación al debido proceso y violación al acceso a la justicia*”, ya que el profesional Especializado 222-24 del Área de Gestión Políciva Jurídica de la Alcaldía Local de Tunjuelito, dio trámite a la queja instaurada por el señor Carlos Javier Romero Arias, esto es, sometiéndola a reparto a los Inspectores de Policía de acuerdo con el trámite establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). (Negrilla y subraya fuera de texto).

Frente al hecho No. 7: La Alcaldía Local de Tunjuelito no se pronuncia porque no le consta lo dicho por la accionante, en consecuencia, se atiende a las resultas de lo probado dentro de la presente acción.

Frente al hecho No. 8: No es cierto, Como ya se mencionó anteriormente, el sistema “ARCO”, implementado por la Secretaría Distrital de Gobierno para el registro y trámite de comparendos, quejas y querellas de competencia de los inspectores de policía distrital, **NO PERMITE QUE EL PROFESIONAL 222-24 DEL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA, UNA VEZ HAYA REALIZADO EL REPARTO Y ASIGNACIÓN DE UNA ACTUACIÓN POLICIVA, PUEDA NUEVAMENTE REASIGNARLA COMO LO EXIGE EL SEÑOR ACCIONANTE.**

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades ha evidenciado la necesidad de clarificar la situación jurídica de la parte pasiva en la acción de tutela, a efectos de no incurrir en el desconocimiento del derecho al debido proceso de quien sea llamado a responder, por violentar los principios de legalidad y contradicción.

En primer lugar, en Sentencia T-416 de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, el Alto Tribunal Constitucional estableció:

*“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y **las razones de la oposición por el demandado**, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es **una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso**. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo*

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

*Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello **no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales**, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, **el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción**.” (Subraya y negrilla fuera del texto original).*

En segundo lugar, la Sentencia T-278 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, con ponencia de la Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado, se dijo:

“Legitimación por pasiva

*6. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo **hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso**”.* (Subrayado y negrillas fuera del texto original)

De acuerdo con lo anterior, la legitimación en la causa, sea por activa o por pasiva, es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste a una persona, sea natural o jurídica, para ostentar dicha calidad y, por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas. Así las cosas, es necesario valorar las facultades con que cuenta esta alcaldía local para resolver las pretensiones del accionante.

Ahora bien, el artículo 86 del Estatuto Orgánico de Bogotá contenido en el Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 2116 de 2021, contempla como atribuciones de los alcaldes locales entre otras, las siguientes:

“Artículo 86. Atribuciones. Corresponde a los alcaldes locales:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales.

(...)

13. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.”

(...).

De acuerdo con los argumentos jurídicos esbozados anteriormente, la Alcaldía Local de Tunjuelito no tiene facultad alguna para interferir o conocer sobre el asunto objeto de la acción de tutela, teniendo en cuenta que

existen normas de orden Distrital que establece el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, configurándose así la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

Así mismo, la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) en su artículo 206 define lo siguiente:

ARTÍCULO 206. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA RURALES, URBANOS Y CORREGIDORES. *Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:*

1. *Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.*
2. *Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación.*
3. *(...).*
4. *Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos.*
5. *Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas:*
 - a) *Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles;*
 - b) *Expulsión de domicilio;*

Finalmente, Artículo 207 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) en su artículo 206 establece lo siguiente:

“Artículo 207. Las autoridades administrativas especiales de policía. *Las autoridades administrativas en salud, seguridad, ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones proferidas por los inspectores o corregidores de policía, según la materia.*

Así las cosas, conforme a la norma transcrita se deduce que los Inspectores de Policía son autoridades de apoyo a nivel local en el Distrito Capital y su función principal es promover las relaciones pacíficas y de armonía con la comunidad, así como conciliar y resolver los asuntos que surgen en el ejercicio de la convivencia ciudadana a través de las normas de policía, es decir que, por la naturaleza del cargo, los Inspectores de Policía ejercen funciones de carácter principal tipificadas en el derecho policivo y otras de carácter subsidiario asignadas por la Ley tales como: Imposición de comparendos ambientales, ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales, las demás que le señale la Constitución y la Ley, las ordenanzas y los acuerdos; conocer de la aplicación de medidas correctivas de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 1801 de 2016, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa que le asiste a los infractores.

Autoridad policial que es nombrada o designada por el Alcalde Mayor y el Secretario Distrital de acuerdo con el numeral 13 del Artículo 205 de la Ley 1801 de 2016 en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo Distrital 735 de 2019.

Así las cosas, de acuerdo con los argumentos jurídicos esbozados anteriormente, la Alcaldía Local de Tunjuelito no tiene facultad alguna para interferir o conocer sobre el asunto objeto de la acción de tutela, teniendo en cuenta que existen normas de orden Nacional y Distrital que establecen la organización y estructura de los

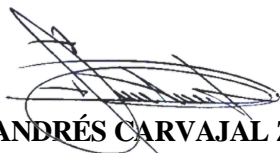
Inspectores de Policía en Colombia, configurándose así la **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.**

De los argumentos jurídicos aquí esbozados y de las pruebas aportadas en esta contestación, no se evidencia por parte de esta Alcaldía Local, la vulneración de algún derecho fundamental que le asista al accionante, teniendo en cuenta que la entidad procedió conforme a derecho, cumpliendo con las obligaciones administrativas impuestas de manera legal y funcional, esto es, se insiste, siguiendo el procedimiento normativo aplicable para esta clase de procesos y procedimientos administrativos, ya que, en relación con el procedimiento policivo es la Inspección 6A a quien correspondió por reparto adelantar la actuación, no siendo procedente atribuirle la responsabilidad a la Alcaldía Local de Tunjuelito para resolver de fondo la situación planteada por el accionante, como tampoco la ausencia del Inspector de Policía en la Inspección 6A en la Localidad Sexta de Tunjuelito, porque como ya se mencionó, esa competencia es de la Dirección de Gestión del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno.

No obstante, nuevamente resalto que el día 28 de enero de 2025, a través de la resolución No. 0077 fue asignado el Inspector de Policía 6A para la Localidad Sexta de Tunjuelito, para que proceda a adelantar el trámite correspondiente de la querella instaurada por el tutelante.

Por consiguiente, solicito a su señoría de la forma más respetuosa y de acuerdo con los argumentos facticos y jurídicos, se desvincule a la Alcaldía Local de Tunjuelito de la presente acción de tutela toda vez que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor Carlos Javier Romero Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.986.184 de Bogotá.


Cordialmente;



JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA

Alcalde Local de Tunjuelito (E)

alcalde.tunjuelito@gobiernobogota.gov.co

Elaboró: Juan Danilo Mendoza – Abogado Contratista AGPJ 

Revisó y Aprobó: Carlos Eduardo Hoyos Páez- Prof. 222-24 (E)AGPJ 

Alba Astrid Sarria Barragán - Abogada Contratista AGPJ 